



05/03/2018

REF: SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA. EXPEDIENTE 001-020831

1º Con fecha 2 de febrero de 2018, se formuló una solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicitud que quedó registrada con el número de expediente indicado anteriormente.

El objeto de la solicitud se refiere a un procedimiento de extradición en curso solicitado, a instancias de la justicia española, a las autoridades de Burkina Fasso. En el marco de dicho procedimiento de extradición, el objeto concreto de la solicitud se refiere al resultado de una vista judicial de extradición llevado a cabo en un tribunal de Burkina Fasso, fecha en la que, en su caso, está prevista la entrega del prófugo a España, información sobre posibles nuevas fugas del reclamado y sobre las comparecencias apud acta que haya realizado en Burkina Fasso, así como el detalle de las gestiones que haya realizado España para agilizar su entrega a España.

Se solicita además que la información solicitada sea proporcionada de la forma más desglosada posible, que los datos estén en formato estructurado para que puedan ser procesados automáticamente por un ordenador y que preferiblemente estén en formato de archivo no propietario.

2º. Con idéntica fecha de 2 de febrero, dicha solicitud se recibió en esta Dirección General, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución.

3º. Lo solicitado se enmarca claramente en un procedimiento judicial en curso en España, en el que, por decisión jurisdiccional, la autoridad judicial requiere al Gobierno para que solicite la extradición a otro país. El artículo 824 de la Lecrim regula el procedimiento al señalar que “los Fiscales de las Audiencias y el del Tribunal Supremo, cada uno en su caso y lugar, pedirán **que el Juez o Tribunal proponga al Gobierno que solicite la extradición** de los procesados o condenados por sentencia firme, cuando sea procedente con arreglo a Derecho.” El Gobierno actúa en todo caso, en los procedimientos de extradición activa a instancia del juez o tribunal que está conociendo del procedimiento judicial, y las solicitudes de extradición forman parte de dicho procedimiento judicial.

4º De acuerdo a la letra e) del apartado 1 del artículo 14 de la citada Ley 19/2013, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

5º el acceso a la información que se solicita supone un perjuicio para la investigación de los ilícitos penales tal y como establece el artículo 14.1 e), motivo que además encuentra **apoyo constitucional en el artículo 105 b) de la Carta Magna** que permite a la Administración denegar el acceso cuando afecte a la averiguación de delitos. Es evidente que, la información que se solicita forma parte de un procedimiento penal en curso en



España, por lo que con la divulgación de la información solicitada se vería afectada la necesidad de proteger la investigación de los delitos investigados en un procedimiento sub iudice.

6º Una vez analizada la solicitud, este Centro Directivo considera que la divulgación de la información a la que se pretende acceder supondría un perjuicio para la materia señalada en el expositivo precedente, resultando de plena aplicación el motivo de denegación recogido en el artículo 105 b) de la Constitución y que recoge igualmente el artículo 14.1 e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Buen Gobierno y Acceso a la Información que sirve de base a la solicitud.

7º. En consecuencia, según lo dispuesto en el artículo 14.1. e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, esta Dirección General resuelve denegar el acceso a la información pública.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso Contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid o ante el Tribunal Superior de Justicia en que tenga su domicilio el solicitante, a su elección, en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el plazo de un mes. En ambos casos, el plazo se contará a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente resolución. (Cf. Arts. 20.5, 23 y 24 de la Ley 19/2013, de 13 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en relación con los Arts. 30, 112.2 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa).

EL DIRECTOR GENERAL

Javier Herrera